



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ  
D.C.

---

Bogotá D. C., once (11) de febrero de dos mil diecinueve (2019).

<b>RADICADO:</b>	11001-33-35-026- <b>2017-00304</b>
<b>MEDIO DE CONTROL:</b>	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
<b>DEMANDANTE:</b>	JORGE HUMBERTO GONZALEZ
<b>DEMANDADO:</b>	UNIVERSIDAD DISTRITAL "FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS"
<b>ASUNTO:</b>	<b>DECISIÓN DE SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR</b>

En el presente asunto, el señor Jorge Humberto González, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda solicitando la nulidad de los actos administrativos que se enuncian a continuación, y respecto de los cuales reclama la medida cautelar de suspensión provisional de sus efectos:

**1°. Resolución 623 del 16 de noviembre de 2016**, por medio de la cual el Rector de la Universidad Distrital "*Francisco José de Caldas*", declaró que la pensión de jubilación reconocida y pagada por dicha institución de educación superior a favor del actor, es incompatible con la pensión de vejez reconocida por el extinto Instituto de Seguros Sociales, por incurrir en la prohibición de que trata el artículo 128 de la Carta Política.

Dicho acto administrativo a su vez concedió al demandante el término para manifestar cuál de las dos prestaciones se le seguiría cancelando por resultar más favorable, so pena de proceder a subrogar la pensión de jubilación que devengaba por cuenta del claustro universitario.

**2°. Resolución 112 del 28 de febrero de 2017**, por medio de la cual se resolvió un recurso de reposición impetrado en contra de la Resolución 623 de 169 de noviembre de 2016, en el sentido de confirmar íntegramente el acto recurrido y otorgar al demandante el término legal para indicar cuál de las dos pensiones que devengaba se seguiría cancelando.

Teniendo en cuenta la solicitud elevada por la parte actora para que se ordene la suspensión provisional de los actos demandados que se

enunciaron<sup>1</sup>, y que de dicho pedimento se corrió el traslado previsto en el artículo 233 del C.P.A.C.A.<sup>2</sup>, dentro del cual la entidad accionada se pronunció<sup>3</sup>, procede el Despacho a resolver la medida cautelar invocada, de conformidad con los siguientes,

## **ANTECEDENTES**

### ***i. Panorama fáctico.***

Los hechos sobre los cuales se sustenta la solicitud de medida cautelar están contenidos en el escrito de la demanda y al respecto, se señaló que el señor Jorge Humberto González Peñarete nació el 9 de abril de 1948, lo cual implica que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 se encontraba cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de dicha norma.

Así mismo, se aduce que el demandante estuvo vinculado con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas entre el 23 de abril de 1976 hasta el 15 de diciembre de 1997 como Profesor Universitario.

La Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en calidad de empleador, emitió la Resolución 009 del 23 de febrero de 1998 por medio de la cual reconoció y ordenó el pago de una pensión de jubilación a favor del demandante a partir del 15 de diciembre de 1997, en cuantía equivalente al 100% del salario promedio mensual devengado durante el último año de prestación de servicios<sup>4</sup>, de acuerdo con el concepto emitido por la División de Recursos Humanos del Establecimiento de Educación Superior.

A su turno, el Instituto del Seguro Social a través de Resolución No. 046237 del 29 de septiembre de 2008,<sup>5</sup> reconoció pensión de vejez al demandante a partir del 8 de abril de 2008, equivalente al 90% del ingreso base de liquidación.

La Resolución 009 del 23 de febrero de 1998, fue objeto de acción de nulidad y restablecimiento del derecho que cursó en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que culminó su trámite con sentencia del 15 de mayo de 2008, proferida por el Honorable Consejo de Estado, en la cual se declaró la nulidad de dicho acto administrativo en cuanto liquidó la pensión de jubilación del actor y a su vez, ordenó la reliquidación de dicha prestación con el 75% del promedio de los factores salariales devengados por el actor en su último año de servicios.

---

<sup>1</sup> Folios 1 a 14 del cuaderno de medidas cautelares.

<sup>2</sup> Folios 16 y 17 del cuaderno de medidas cautelares.

<sup>3</sup> Folios 18 a 24 del cuaderno de medidas cautelares.

<sup>4</sup> Folio 50 del cuaderno principal

<sup>5</sup> Folio 52 cuaderno principal

De acuerdo a lo anterior, la UNIDISTRITAL<sup>6</sup> expidió la Resolución 026 del 28 de enero de 2010<sup>7</sup>, por medio de la cual da cumplimiento a un fallo proferido por el Consejo de Estado, que confirmó la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y ordenó la reliquidación de la pensión jubilación con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, y los cuales se encuentran enumerados en la Ley 62 de 1985.

Posteriormente, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas emitió la Resolución No. 469 del 22 de septiembre de 2015<sup>8</sup>, por medio de la cual se inicia un trámite administrativo para declarar la compatibilidad pensional o para aplicar la subrogación de una mesada pensional de jubilación por compartibilidad con Colpensiones.

A través de Resolución No. 623 del 16 de noviembre de 2016<sup>9</sup>, la UNIDISTRITAL, declaró la incompatibilidad de las pensiones percibidas por el demandante, al considerar que se estaba incurriendo en la prohibición de que trata el artículo 128 de la Constitución Política, por devengar dos asignaciones provenientes del erario.

Tiempo después, la UNIDISTRITAL expidió la Resolución 112 del 28 de febrero de 2017<sup>10</sup>, por medio de la cual procedió a resolver el recurso de reposición interpuesto por el actor contra la Resolución No. 623 del 16 de noviembre de 2016, resolviendo confirmar en cada una de sus partes la decisión tomada en éste último acto administrativo; a su vez, dispuso otorgarle un término de 10 días hábiles al actor con el fin de seleccionar la pensión que seguiría cancelándosele, so pena de proceder a la subrogación pensional.

En el marco de dicho trámite, se emitió la Resolución 465 del 16 de agosto de 2017<sup>11</sup>, por medio de la cual la entidad demandada, subrogó de la pensión mensual de jubilación reconocida por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el valor de la pensión reconocida por Colpensiones. Contra éste acto administrativo no procedía recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa.

## **ii. Sustentación de la medida cautelar**

En sustento de la solicitud de suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, la parte actora enfoca su carga argumentativa hacia la vulneración del artículo 29 de la Constitución Política, artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y Decreto 2879 de 1985.

---

<sup>6</sup> Universidad Distrital “Francisco José de Caldas”.

<sup>7</sup> Folios 53 a 56 del cuaderno principal

<sup>8</sup> Folios 57 a 64 Cuaderno principal

<sup>9</sup> Folios 80 a 103 cuaderno principal

<sup>10</sup> Folios 123 a 141 Cuaderno principal

<sup>11</sup> Folios 157 a 161 Cuaderno principal

En virtud de lo anterior, cuestiona el hecho de que la pasiva haya manifestado que para la adopción de las resoluciones enjuiciadas se acató el debido proceso, dado que en sentir de la parte actora, esto no ocurrió, pues al margen de que se hubiera adoptado el procedimiento administrativo correspondiente, en realidad se desconocieron los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003 y la jurisprudencia concordante de la Corte Constitucional, que restringen la facultad de la administración para revocar o subrogar directamente las pensiones obtenidas de manera legal.

A juicio de la parte demandante, cuando en la Resolución 623 del 16 de noviembre de 2016, la pasiva subrogó la pensión de jubilación que ella venía pagando de manera simulada, habida consideración que lo que hizo fue revocar de manera directa y sin el consentimiento del titular, el derecho pensional que la misma entidad había reconocido, actuando en contravía de los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003.

Por lo anterior, el demandante considera que la pasiva no estimó dentro del proceso administrativo que dio origen a las resoluciones demandadas, que la pensión de jubilación que subrogó de manera unilateral, es una pensión reconocida mediante fallo judicial, plasmado por la Universidad Distrital mediante Resolución No. 026 del 28 de enero de 2010, la cual dio cumplimiento a lo ordenado por el H. Consejo de Estado, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 2004-006076.

Señala, que tratándose de una pensión de jubilación reconocida mediante fallo judicial, el artículo 20 de la ley 797 de 2003, exige que de manera excepcional y perentoria, que únicamente podrá ser revisada por el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo a sus competencias, a solicitud del Gobierno por conducto del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, del Contralor o Procurador General de la Republica, y no mediante un proceso administrativo como lo realizó la Universidad, por lo que la entidad demandada incurrió en desviación del poder y abuso de funciones, pues no es la competente para declarar la incompatibilidad y subrogación pensional.

En el plano legal, la parte actora considera que la entidad accionada aplicó de manera indebida el Acuerdo 029 de 1985 aprobado por el Decreto 2879 del mismo año, habida consideración que, dentro del presente asunto, una pensión es compartida con el ISS cuando por lo menos la entidad patronal que se subroga ha cumplido las obligaciones de estar registrada con tal ante el Instituto, y haber afiliado a su trabajador al ISS, efectuando los correspondientes descuentos de nómina que los aporta para el cubrimiento de la prestación, concluyendo así que sin afiliación no hay subrogación.

Señala, que la subrogación conlleva una vez se otorga la pensión extralegal, la obligación patronal de seguir cotizando al Seguro Social, hasta el cumplimiento de los requisitos legales de edad y número de semanas cotizadas, que para el caso en concreto, no se presenta, habida consideración que no existe por parte de la UNIDISTRITAL, afiliación y/o partes al ISS a nombre de sus empleados de nómina al momento de la aparición de la Ley 100 del 93, por lo que la entidad demandada no puede reclamar subrogación alguna.

Por lo tanto, la naturaleza de la prestación reconocida por la entidad oficial, es otorgada por el cumplimiento de los requisitos y no se encuentra sujeta a alguna condición resolutoria posterior, sino que por el contrario, es definitiva e intangible como derecho adquirido.

De acuerdo con el anterior panorama, considera que la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos enjuiciados, es el mecanismo eficaz con el que cuenta la parte actora, para defenderse de la ilegalidad que se predica de los mismos y los perjuicios que se originaron en su expedición, concretamente por tratarse de una persona que supera la tercera edad.

### ***iii. La entidad accionada***

Se advierte que el demandante prestó sus servicios a la institución universitaria en calidad empleado público, es decir, como docente universitario, por lo que no se le aplica el régimen exceptuado de los docentes de primaria y bachillerato.

Señala, que tanto la pensión de jubilación, como la pensión de vejez reconocida por el ISS, amparan el mismo riesgo común que es la vejez del trabajador.

Bajo tal panorama, advierte que dichas prestaciones están enmarcadas en las restricciones de los artículos 128 superior y 19 de la Ley 4ª de 1992, que no es otra cosa que la prohibición de devengar más de una asignación del erario, lo cual debe entenderse en armonía con los principios de unidad y universalidad del Sistema General de Seguridad Social, que no contempla la duplicidad de prestaciones que cubran la misma contingencia.

Por lo anterior concluye que en el caso de la parte actora se presenta la incompatibilidad pensional, habida cuenta que el régimen aplicable en dicha materia es el contenido en la Ley 100 de 1993 y el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968, de modo que sus dos pensiones fueron financiadas mediante las cotizaciones efectuadas por autoridades públicas, y no financiada exclusivamente por aportes realizados por

patronos particulares, situación que si aceptaría la compatibilidad de pensiones.

En ese orden de ideas, considera que en el caso del demandante no se presentó ilicitud ni en el procedimiento, ni en la decisión adoptada, pues era claro que se había incurrido en la prohibición señalada en el artículo 128 de la Constitución Política.

En el primero de los aspectos señalados, destaca el hecho de que al demandante fue notificado en debida forma de las decisiones adoptadas y que se le otorgaron las oportunidades para ejercer el derecho de contradicción y de interponer recursos, lo que desvirtúa la vulneración del debido proceso que se alega.

Por otra parte, aclara que la noción del derecho al mínimo vital debe entenderse en armonía con la satisfacción de las necesidades básicas del individuo, de modo que las afirmaciones de la parte actora en punto a que con los actos acusados se le irrogó un perjuicio, carecen de asidero pues el hecho de haberse declarado la incompatibilidad y consecuente subrogación de las pensiones que devengaba no condujo necesariamente a la vulneración de sus derechos fundamentales.

Lo anterior teniendo en cuenta que actualmente el demandante se encuentra devengando una prestación pensional cuya cuantía excede los dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que holgadamente le permiten satisfacer sus necesidades básicas y una vida congrua.

### **CONSIDERACIONES**

#### ***Sobre la procedencia de la medida cautelar***

Como primera medida, se debe tener en cuenta que la suspensión provisional pretendida, es considerada como una medida cautelar, pues así lo dispuso el art. 230 del C.P.A.C.A., al señalar lo siguiente:

***“Artículo 230. Contenido y alcance de las medidas cautelares.***

*Las medidas cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:*

*(...)*

***3. Suspende provisionalmente los efectos de un acto administrativo.***

*(...)”. (Destacado fuera de texto)*

Así pues, se tiene que los actos administrativos cuyos efectos se solicita suspender de manera provisional, son las Resoluciones **(i) 623 del 16 de noviembre de 2016**, por medio de la cual se declaró que la pensión de jubilación reconocida y pagada al actor por la UNIDISTRITAL es incompatible con la pensión de vejez reconocida por el extinto ISS, y **(ii) 112 del 28 de febrero de 2017**, que resolvió de manera desfavorable un recurso de reposición impetrado en contra de la primera de las decisiones enunciadas, en el sentido de confirmarla.

Ambos actos administrativos otorgaron al demandante el término legal para indicar cuál de las dos pensiones que devengaba se seguiría cancelando por considerarse más favorable, so pena de proceder a subrogar la pensión administrada por la UNIDISTRITAL.

Al respecto, la Ley 1437 de 2011, desarrolló un acápite específico para la implementación de las medidas cautelares al interior de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, dentro del cual, sobre los requisitos de las mismas, se señaló:

**“Artículo 231. Requisitos para decretar las medidas cautelares.** Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo, la suspensión provisional de sus efectos procederá por violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal violación surja del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud. Cuando adicionalmente se pretenda el restablecimiento del derecho y la indemnización de perjuicios deberá probarse al menos sumariamente la existencia de los mismos.

*En los demás casos, las medidas cautelares serán procedentes cuando concurran los siguientes requisitos:*

- 1.** *Que la demanda esté razonablemente fundada en derecho.*
- 2.** *Que el demandante haya demostrado, así fuere sumariamente, la titularidad del derecho o de los derechos invocados.*
- 3.** *Que el demandante haya presentado los documentos, informaciones, argumentos y justificaciones que permitan concluir, mediante un juicio de ponderación de intereses, que resultaría más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla.*
- 4.** *Que, adicionalmente, se cumpla una de las siguientes condiciones:*

*a) Que al no otorgarse la medida se cause un perjuicio irremediable,*  
*o*

*b) Que existan serios motivos para considerar que de no otorgarse la medida los efectos de la sentencia serían nugatorios”.*

Pues bien, de la norma se infiere que dentro de los requisitos para decretar una medida cautelar, específicamente la suspensión provisional de sus efectos, se plantea una disyuntiva en cuanto al mecanismo para decretar su procedencia, pues como lo señala el artículo en comento, la solicitud procederá bien sea por **(i)** violación de las disposiciones que se invoquen en la demanda o **(ii)** en la solicitud que se realice de manera separada.

Lo anterior, sumado a que la procedencia de la suspensión provisional de los efectos de un acto administrativo susceptible de nulidad, puede acontecer si la violación de las disposiciones invocadas surge, es decir, aparece presente, desde el momento en que se inicia el proceso. La norma señala además, que dicho análisis se realiza a partir del estudio del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del análisis de las pruebas allegadas con la solicitud de la medida.

En ese orden, el artículo 231 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, faculta al Juez Administrativo para que desde el primer momento procesal obtenga la percepción de que hay la violación normativa alegada, y en ese orden, pueda comparar el acto administrativo acusado con las normas invocadas que se consideran violadas, y le permite además estudiar las pruebas allegadas con la solicitud.

Entonces, conforme a los condicionamientos establecidos por el ordenamiento jurídico en materia de medidas cautelares, el Despacho encuentra que en criterio de la parte actora, con la expedición de los actos administrativos acusados se incurrió en la vulneración de las siguientes preceptivas:

- Artículo 29 de la Constitución Política;
- Artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003;
- Acuerdo 029 de 1985 – aprobado por el Decreto 2879 de 1985.

De acuerdo con lo anterior, en primer lugar se tiene que tal y como quedó establecido en los antecedentes de este proveído, la parte actora estima conculcados el artículo 29 en armonía con los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, pues en la Resolución No. 623 del 16 de noviembre de 2016, la UNIDISTRITAL revocó directamente y sin el consentimiento del señor González Peñarete, la pensión de jubilación

que dicha institución universitaria venía administrando, con lo cual se vulneró el derecho al debido proceso y se desconoció la potestad prevista en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

Al respecto, el Despacho considera que no es de recibo el argumento que la parte actora plantea en tal sentido, pues si bien es cierto que la jurisprudencia de la Honorable Corte Constitucional ha reconocido que en el ejercicio de la potestad señalada en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, debe garantizarse el debido proceso del titular del derecho afectado con la medida, lo cierto es que dicha norma regula la revocatoria de las pensiones reconocidas irregularmente, es decir, aquellas cuyo reconocimiento se efectuó sin el cumplimiento de los requisitos legales o sobre la base de documentación falsa, no siendo este el caso del demandante, a quien se le declaró la incompatibilidad entre las pensiones de jubilación y de vejez que se le venían pagando, en virtud de lo cual además se le facultó para escoger la prestación que le fuese más favorable, y que en el caso de que no ejerciera esta potestad, se procedería a subrogar la primera de dichas pensiones.

En otras palabras, no puede alegarse que la demandada desconoció el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, pues en este asunto no se está censurando el hecho de que la pensión de jubilación que el accionante devengaba por cuenta de la UNIDISTRITAL se obtuvo mediante la presentación de documentos falsos o con incumplimiento de los requisitos legales, sino debido al hecho de que las circunstancias particulares de la trayectoria laboral del actor, implicaron que a la postre se le otorgaran pensiones que eventualmente pueden resultar incompatibles.

Pese a lo anterior, de admitirse como cierta la afirmación que la parte actora plantea en tal sentido, para el Despacho es claro que si bien la aplicación del artículo 19 de la Ley 797 de 2003, exige el sometimiento de tal actuación al derecho fundamental al debido proceso, la facultad de revocatoria directa allí prevista, debe entenderse en contexto con la integridad de la norma, es decir, en el sentido de que si la autoridad que administra la prestación, luego de agotado el procedimiento administrativo y sobre la base del convencimiento que le ofrecen las pruebas recaudadas, llega a la conclusión que la pensión fue otorgada por medios ilegales o con ausencia de requisitos, puede proceder a revocarla, aún sin el consentimiento del titular del derecho pensional. Como se observa, la parte actora confunde la facultad prevista en el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, con el proceso de revocación directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto, previsto en el artículo 97 del C.P.A.C.A.

Por lo mismo, considera el Despacho que como en el trámite seguido en el caso del demandante, no se buscó declarar la revocación directa

de un acto administrativo de carácter particular y concreto, sino definir la posibilidad de que las pensiones que devengaba podían o no coexistir y en todo caso, con el fin de garantizar la cobertura del riesgo de vejez y la intangibilidad del derecho pensional, la actuación de la UNIDISTRITAL debía sujetarse al procedimiento general establecido en las normas vigentes para las fechas en que fueron expedidas las Resoluciones acusadas.

De acuerdo con lo anterior, al tratarse de una actuación iniciada de oficio, debía brindársele al interesado la posibilidad de hacerse parte en el procedimiento administrativo, solicitar pruebas y en todo caso ejercer su derecho de defensa y contradicción, en aras de garantizar el debido proceso y evitar que la administración adoptara decisiones arbitrarias en perjuicio del accionante.

Con fundamento en ello, se tiene que en virtud de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 35 del C.P.A.C.A.<sup>12</sup> al demandante se le notificó la Resolución 623 de 16 de noviembre de 2016<sup>13</sup>, por medio de la cual se inició el proceso administrativo, se decretaron pruebas y se le brindó al demandante la oportunidad para efectuar las manifestaciones del caso con el fin de que fueran tenidas en cuenta al momento de adoptar la decisión definitiva, dejándole abierta la posibilidad de elegir la prestación social más favorable a seguir cancelando.<sup>14</sup>

Es más, de las pruebas que acompañaron la demanda se infiere que mediante Resolución 260 del 12 de agosto de 2016 (fl. 82 cdno. ppal.), la pasiva efectuó la respectiva incorporación de las pruebas decretadas en el curso de dicho procedimiento administrativo, además de haberse pronunciado frente a los medios de pruebas solicitados por el interesado, todo ello antes de proferir la decisión definitiva, es decir, la Resolución No. 623 del 16 de noviembre de 2016 (fls. 80 a 103 cdno. ppal.).

En vista de lo anterior, es claro que se dio cumplimiento al artículo 42 del C.P.A.C.A., el cual preceptúa que habiéndose dado la oportunidad al interesado para expresar su punto de vista y sobre la base de las pruebas recaudadas durante el respectivo trámite, se adoptará la decisión que corresponda, la cual será motivada y se pronunciará sobre todas las peticiones planteadas en el curso de la actuación.

---

<sup>12</sup> **“Artículo 35. Trámite de la actuación y audiencias.** Los procedimientos administrativos se adelantarán por escrito, verbalmente, o por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto en este Código o la ley.

Cuando las autoridades procedan de oficio, los procedimientos administrativos únicamente podrán iniciarse mediante escrito, y por medio electrónico sólo cuando lo autoricen este Código o la ley, debiendo informar de la iniciación de la actuación al interesado para el ejercicio del derecho de defensa.

Las autoridades podrán decretar la práctica de audiencias en el curso de las actuaciones con el objeto de promover la participación ciudadana, asegurar el derecho de contradicción, o contribuir a la pronta adopción de decisiones. De toda audiencia se dejará constancia de lo acontecido en ella”.

<sup>13</sup> Folio 103 cuaderno principal.

<sup>14</sup> Folio 102 cuaderno principal.

Por todo lo anterior, el Despacho no advierte que se hayan vulnerado, ni el artículo 29 de la Constitución Política, ni el artículo 19 de la Ley 797 de 2003.

Por otra parte, al margen de que el Honorable Consejo de Estado por medio de sentencia del 2 de octubre de 2008, haya definido las condiciones en las cuales había de liquidarse la pensión de jubilación que el actor devengó por cuenta de la UNIDISTRITAL, resulta conveniente precisar que el mecanismo de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, procede *(i)* cuando el reconocimiento se obtuviere con violación del debido proceso, y *(ii)* cuando la cuantía del derecho reconocido excediere lo debido de acuerdo con la ley, pacto o convención colectiva que le eran legalmente aplicables, situación que no sucedió en el presente asunto pues, se insiste, en el caso del señor Jorge Humberto González Peñarete, se pretende establecer si las pensiones de jubilación y de vejez que tenía reconocidas, eran o no incompatibles y si la primera de ellas debía subrogarse.

De este modo, los actos acusados *prima facie*, no pudieron incurrir en la vulneración del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, pues esta norma era inaplicable al caso particular del actor, no solo bajo el entendido de que la controversia dirimida previamente por esta jurisdicción gravitaba en torno a la base de liquidación de la pensión de jubilación del actor, sino además, porque el mecanismo de revisión previsto en dicha norma implicaría examinar la legalidad del derecho pensional a la luz de las condiciones establecidas para dicho reconocimiento, mientras que en esta oportunidad, se insiste, debe determinarse si la pensión de jubilación que el demandante devenga por cuenta de la UNIDISTRITAL, resulta incompatible con aquella que posteriormente le otorgó el extinto ISS, y que actualmente es administrada por COLPENSIONES.

En cuanto a la indebida aplicación del Decreto 2879 de 1985, esta hace referencia a la pensión compartida, y esta solo es aplicable cuando se demuestra que el patrono se encuentra inscrito en el ISS hoy COLPENSIONES.

En tal virtud, como la incompatibilidad que se debate en el presente asunto se predica respecto de las pensiones de jubilación y de vejez otorgadas al demandante, no puede presumirse que las resoluciones acusadas en este medio de control desconocieran el sentido de lo dispuesto en el Decreto 2879 de 1985, pues la norma a la luz de la cual eventualmente puede dirimirse el presente asunto es la Ley 4ª de 1992, en armonía con lo dispuesto en el artículo 128 superior; análisis que se reservará al momento de proferir la sentencia.

En suma, como del resultado del presente análisis no se logró establecer que con la expedición de las **Resoluciones 623 del 16 de noviembre de 2016 y 112 del 28 de febrero de 2017**, se desconocieron las normas superiores y legales que la parte actora estima conculcadas en su solicitud de medida cautelar, y que el tema relativo a la incompatibilidad de las pensiones de jubilación y de vejez otorgadas al demandante, constituye un aspecto que debe ser objeto de un juicio propio de la decisión de fondo, el Despacho negará la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos enunciados en líneas precedentes.

En mérito de lo expuesto, el **Juzgado Veintiséis Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Bogotá – Sección Segunda**,

**R E S U E L V E:**

**PRIMERO: DENIÉGASE** la suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos acusados dentro del presente medio de control, por las razones expuestas en la parte motiva de éste proveído.

**SEGUNDO: COMUNICAR** esta decisión a las partes.

**TERCERO: RECONOCER** personería jurídica al abogado Juan Pablo Murcia Delgado identificado con cedula de ciudadanía No. 79.789.915 de Bogotá y T.P. 97422 del C. S de la Judicatura, para actuar como apoderado judicial de la entidad demandada, en los términos y para los efectos otorgados en el poder visible a folio 212 del cuaderno principal.

De la misma manera el Despacho observa, que a través de memorial obrante a folio 218 del cuaderno principal, el abogado **Juan Pablo Murcia Delgado** manifiesta que renuncia al poder a él conferido, por imposibilidad se continuar con el vínculo contractual con la entidad demandada.

En virtud de lo anterior, se debe tener en cuenta que el artículo 76 del C.G.P., señala que *“La renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido.”*

Por lo tanto, es claro que la renuncia presentada por el abogado **Juan Pablo Murcia Delgado**, puso término al poder, cinco días después de presentado el memorial al Despacho, no siendo necesario aceptar dicha renuncia a través de auto, en tanto de acuerdo con el Código General del Proceso ello se configura al cumplirse lo ordenado en el artículo 76 inciso 4.

**CUARTO: INGRESAR** al despacho el cuaderno principal del expediente descrito en la referencia, a fin de proceder a la fijación de la fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de que trata el artículo 180 del CPACA.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO**  
Juez



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD  
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**

Por anotación en **ESTADO ORDINARIO** notifico a las partes la providencia anterior hoy **12 DE FEBRERO DE 2019**, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.)



**LIZZETH VIVIANA CANGREJO SILVA**  
SECRETARIA

